

En las actuales condiciones, España tardará más de una década en ponerse a la altura tecnológica media de los países de la Unión Europea. El Gobierno es consciente de que la competitividad española pasa por el impulso de las

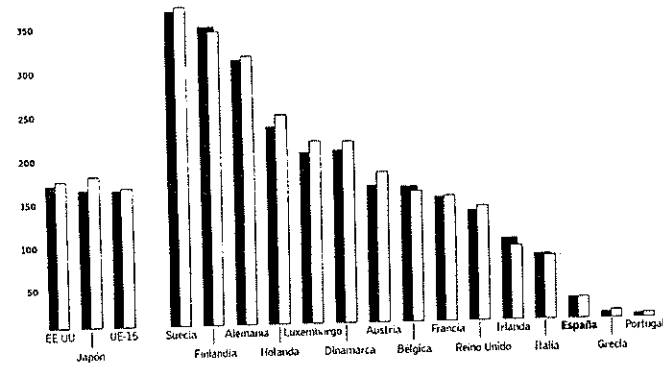
tecnologías, pero sus acciones no han dado los frutos esperados. El fracaso del plan Info XXI ha supuesto la pérdida de tres años clave en el desarrollo de la sociedad de la información. Aunque los expertos coinciden en que no hay

una relación causal entre déficit cero e inversión tecnológica, creen que es imprescindible que la Administración tome diversas medidas, desde acciones de formación y divulgación a la desgravación fiscal o la subvención del sector.

## España, a la cola de la sociedad de la información

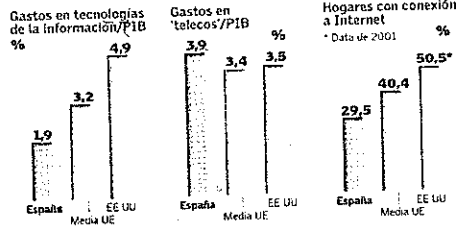
NÚMERO DE PATENTES SOLICITADAS

■ 2000 □ 2001

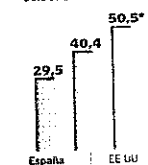


Fuente: Eurostat

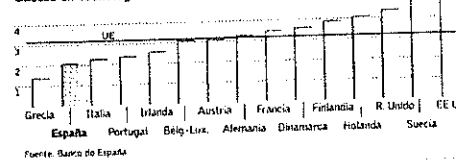
### INVERSIÓN TECNOLÓGICA



Hogares con conexión a Internet - Data de 2001



### Gastos en tecnologías de la información/PIB



Fuente: Banco de España

### GASTO EN I+D En % del PIB

Suecia	3,78
Finlandia	3,67
Alemania	2,52
Francia	2,13
Dinamarca	2,07
Países Bajos	2,02
Bélgica	1,96
Unión Europea-15	1,94
Reino Unido	1,86
Austria	1,86
Luxemburgo	1,36
Irlanda	1,21
Italia	1,04
España	0,97
Portugal	0,76
Grecia	0,67

Fuente: Eurostat

# El ahorro tecnológico pasa factura

C. Fernández / M. Jiménez Madrid

Char una ojeada al panorama tecnológico español resulta desalentador. España se sitúa a la cola europea en todos los índices que se utilizan para medir el grado de desarrollo de la sociedad de la información, a pesar de que la Administración lleva años insistiendo en su preocupación por favorecer la innovación y el uso de tecnologías como elementos catalizadores de la competitividad económica.

Los últimos datos del Banco de España sobre el año 2002 muestran que el gasto tecnológico representa sólo 1,9% del PIB, cuando la media europea es del 3,2%. Sólo Grecia gasta menos que España. Las inversiones en investigación y desarrollo son igualmente mínimas, con un 0,97% del PIB dedicado a estas actividades, la mitad de la media europea que está en el 1,94% del PIB, según cifras del último informe de Eurostat.

Fuera de la Unión Europea, España tampoco sale bien parada. El Foro Económico Mundial presentó este año un estudio en el que España quedaba en el puesto 61 dentro de una clasificación de 82 países en cuanto a gasto tecnológico. Vietnam y Colombia, entre otros países en vías de desarrollo, invierten más dinero en tecnologías que España.

El desarrollo tecnológico es el gran suspenso del gabinete de Aznar, que no ha sabido canalizar los esfuerzos para impulsar la aplicación de las nuevas tecnologías en

las empresas, la Administración y la educación. El Plan Info XXI, con un presupuesto de 5.000 millones de euros que recogía más de 300 proyectos divididos por ministerios, ha supuesto el mayor de sus fracasos.

Tres años después de su puesta en marcha, cuando Info XXI debía concluir, no se ha ejecutado ni el 50% del presupuesto. Nadie entiende el porqué de esta contención del gasto cuando la falta de resultados de este plan ha sido una crítica constante que ha perseguido al Gobierno.

Josep Piqué, que vino a sustituir a Anna Birlés en la cartera de Ciencia y Tecnología, reconoció la falta de resultados después de constituir la Comisión Soto para que evaluase el cumplimiento del famoso plan.

Esta comisión formada por 10 expertos procedentes del sector tecnológico español y presidida por Juan Soto, un clásico de la informática que ha sido hasta hace meses la principal cabeza visible de HP en España, se ha planteado encontrar la vacuna contra el déficit tecnológico. El nuevo programa, conocido como Plan Soto, contempla una inversión de 1.200 millones de euros en un plazo de dos años.

Con un 54% de los ciudadanos que no tienen un ordenador en casa y un 48% de las empresas que no extraen el máximo rendimiento de las tecnologías por falta de formación (según las conclusiones de la Comisión), Piqué ha insistido en que su política no pasa por subven-

cionar la compra de ordenadores.

Las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, que además atraviesan un momento de mercado difícil, parecen ser conscientes de que el Gobierno no va a facilitar ayudas económicas, que tampoco son sus principales peticiones.

"Manejar unas cuentas públicas equilibradas está muy bien, pero no debemos sacralizarlo", comenta Jesús

Banegas, presidente de Aniel. "Aunque la relación entre déficit cero y baja inversión tecnológica no es tan evidente, porque quien invierte mayoritariamente en tecnología es la empresa privada y no el Gobierno, éste sí debe actuar. Sus acciones no deben relacionarse tanto con el presupuesto nacional del Estado sino más bien con la regulación de los mercados y las políticas de incentivos a la inversión", opina Banegas.

Según Aniel, las acciones prioritarias son tres: incrementar la inversión de la Administración pública "con recursos que provengan de una reducción de gastos corrientes o generando un pequeño déficit fiscal"; no dejar al azar ni a la empresa privada el impulso del servicio de acceso a Internet universal, pues "deben ser las Administraciones públicas quienes lo financian porque son infraestructuras que

no resultan rentables para las operadoras privadas". Y, por último, "establecer una regulación de los mercados de telecomunicaciones y televisión digital terrestre que anime a las empresas del sector a invertir al garantizar que podrán rentabilizar su dinero".

Precisamente Ono, que lleva invertidos unos 2.000 millones de euros en el despliegue de la red de cable en las demarcaciones que le fueron asignadas a través de concursos públicos en 1997, no pide subvenciones pero sí un marco regulatorio estable. "Nuestro proyecto es viable con financiación privada, pero echamos de menos una legislación menos cambiante que asegure nuestras inversiones, que son a muy largo plazo", explica Michael Vorstman, director financiero de Ono.

Banegas asegura que si en España el gasto público aumenta un 5% en términos nominales, el aumento de la inversión en tecnologías de la información debería ser muy superior. "Las inversiones públicas en este sector deberían aumentar porque así se animaría la economía, se mejoraría el servicio público al ciudadano al tener el Estado mejores herramientas y se generaría confianza en el sector privado", subraya el presidente de Aniel.

Los expertos coinciden en que debe incrementarse la inversión en tecnologías de la información. La duda está en quién debe hacerla. Para Enrique Dans, profesor del Instituto de Empresa, la

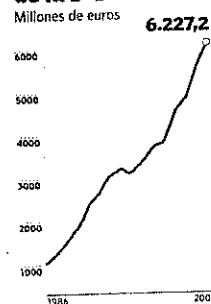
## Las trabas burocráticas frenan los beneficios fiscales por desgravación

Los defensores de las políticas de desgravaciones fiscales como estímulo al gasto chocan de pleno con la situación que vive la investigación.

España cuenta con uno de los marcos fiscales más favorables de la OCDE para desgravar cualquier actividad relacionada con el I+D+i. La ley contempla deducciones que van desde el 30% al 60% de los gastos en innovación y, sin embargo, muy pocas empresas se están beneficiando de estos incentivos.

En el sector se baraja una cifra no oficial que dice que sólo 1.900 empresas dedujeron sus gastos en investigación en 2002. Los empresarios se quejan de que los trámites burocráticos son demasiado complicados y que se aplican criterios diferentes a la hora de decidir si una inversión

### Crecimiento de la I+D



tiene derecho a deducción tributaria o no. Estas dos cuestiones son consideradas frenos a la hora de dedicar partidas mayores a estas actividades.

Además, se insiste en que es muy complicado lograr la financiación. El úl-

política de déficit cero es el buen camino. "Se puede optar por políticas paternalistas que subsidién el avance tecnológico pero esto nos llevaría al que *inventen ellos*. Un política de déficit cero promueve, en cambio, la orientación hacia la eficiencia, la reducción de costes y la inversión privada. Un ejemplo es EE UU, que no subvenciona prácticamente la inversión en tecnología", añade Dans, quien apunta que la inversión en tecnología y en I+D nunca fue objeto de reducción motivada por el déficit cero, "más bien lo contrario, es la partida con un crecimiento mayor".

Dans sí cree, en cambio, que el Gobierno debe crear el ambiente propicio para que se lleve a cabo la inversión en tecnología mediante acciones de formación y divulgación, por ejemplo.

Desde la otra patronal, Sedisi, se ve positivo el equilibrio presupuestario y, por tanto, no piden que se incremente el déficit. "Lo que sí decimos es que si tenemos una demanda de tecnología vegetativa de 100 y pasamos a otra de 200 porque se han hecho acciones que la impulsan, que el incremento de recaudación vía impuesto del Estado no se dirija después a dar dinero a los pensionistas -con mucho respeto a estas personas- ni a bajar los impuestos, sino que se dedique a inversión tecnológica. En definitiva, que no se dedique a comprar votos", apunta Joaquín Oliveras, director general de Sedisi.

### Inversión tecnológica

Esta patronal cree, por ejemplo, que la externalización de procesos en la Administración produciría un ahorro de entre el 20% y el 30% en el gasto informático. "Este ahorro permitiría librar un dinero de gasto para dirigirlo a la inversión tecnológica. El presupuesto sería el mismo, pero dedicado a unas labores diferentes", subraya. Y añade: "La política tiene que ser discriminativa y positiva", dice su portavoz.

Las acciones que se solicitan desde Sedisi son múltiples (un total de 96) y las más importantes se centran en las pymes, los hogares y la Administración pública. Entre ellas, destacan el aumento del actual porcentaje de deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades de las pymes para el fomento de las nuevas tecnologías previsto en la Ley 2000, de un 10% a un 50%, en función del tipo de empresa de que se trate. Y realizar campañas de información y ofertas de formación a través de cámaras de comercio para difundir y formar a los pequeños empresarios. Para los hogares también se propone reducir deducciones en la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas por la adquisición de equipos informáticos y la conexión a Internet.



Josep Piqué, ministro de Ciencia y Tecnología, ha mostrado una gran predisposición a escuchar a las patronales del sector. "Tenemos una excelente comunicación con el equipo actual", dicen algunos de sus portavoces.

El sector informático critica la acción de los Ministerios de Economía y Hacienda

## Sin intervención estatal, se tardará 12 años en alcanzar a Europa

M. J. / L.F. Madrid

"Si dejáramos operar sólo a las fuerzas del mercado y no interviniéramos se cometería un grave error. Tardaríamos 12 años en alcanzar una posición similar a la media europea en cuanto a indicadores de utilización de tecnología", apunta Joaquín Oliveras, director general de Sedisi. Aunque el representante del sector de las tecnologías de la información reconoce que "sí ha habido alguna intervención" (como el nuevo Plan Info XXI que en breve aprobará el Gobierno, y el denominado Plan de Choque, pactado entre el Ministerio de Administraciones Públicas y el de Ciencia y Tecnología y que incluye entre sus 17 medidas la puesta en marcha a principios de 2004 del DNI digital), no es suficiente.

Para Oliveras, la única alternativa es estimular el mer-

cado, aumentar la capacidad de absorción de tecnología por todo el tejido productivo. "En España es insuficiente. Está entre un 30-40% por debajo de la media europea", dice. El portavoz de Sedisi insiste una y otra vez en que él no pide subvenciones sino estimular la demanda. "Hay que estimular el mercado en la parte positiva, en la que incrementa la productividad. Hacer un plan de formación y empleo para miles de personas es mucho más importante que hacer una fábrica".

El gran problema, subraya, está en los centros de decisión económica (Ministerios de Economía y Hacienda), que no están convencidos de la importancia de la tecnología. "Ellos valoran más el equilibrio presupuestario. Y, desde luego, no están impregnados de la idea que tenía la Administración Clinton, que incrementó la tec-

nología en la sociedad americana para que en su conjunto empresas-hogares fuera más competitiva". La tesis que defiende Oliveras es no ayudar a grupos industriales, sino inyectar tecnología en la sociedad.

"Pedimos ayuda al consumidor. Porque creemos que la tecnología no se va a introducir por sí misma y, por ello, debe recibir ayuda". Un estudio de Sedisi, entregado al Gobierno español, muestra cómo, en un modelo con déficit cero, el incremento de la tecnología reduce un 0,3% la inflación, sube casi medio punto el PIB y el empleo aumenta entre 20.000 y 50.000 personas. "El único aspecto negativo es que incrementamos el déficit de comercio exterior, porque debemos importar mucha tecnología, pero se puede equilibrar con la producción en otras áreas", señala Oliveras.

## Las subvenciones sí han funcionado

La mayoría de los expertos consultados prefieren no hablar de subvenciones. Pero reconocen que los incentivos al uso de la informática ha funcionado muy bien en las comunidades autónomas donde se han utilizado.

Y citan dos experiencias: la del Gobierno vasco y la de la Junta de Andalucía. "Hay que aplaudirlas. Son iniciativas extraordinariamente con-

vincentes", apuntan fuentes del sector. Por ejemplo, los datos más recientes del Gobierno andaluz (a 30 de junio de 2003) muestran que han subido ocho puntos por encima de la media nacional: 200.000 hogares más tienen ordenador gracias a estas acciones.

Pero las subvenciones no se han limitado a impulsar la compra de ordenadores de uso doméstico.

El Gobierno vasco, que ha dado una ayuda directa de 11,25 millones de euros para reforzar la conexión de los hogares de Euskadi con Internet (y que ha supuesto una venta de 172.732 PC), ha ampliado su plan a las micropymes. Hoy, más de 5.000 autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores han solicitado un plan que apoya a cada empresa con 1.200 euros.